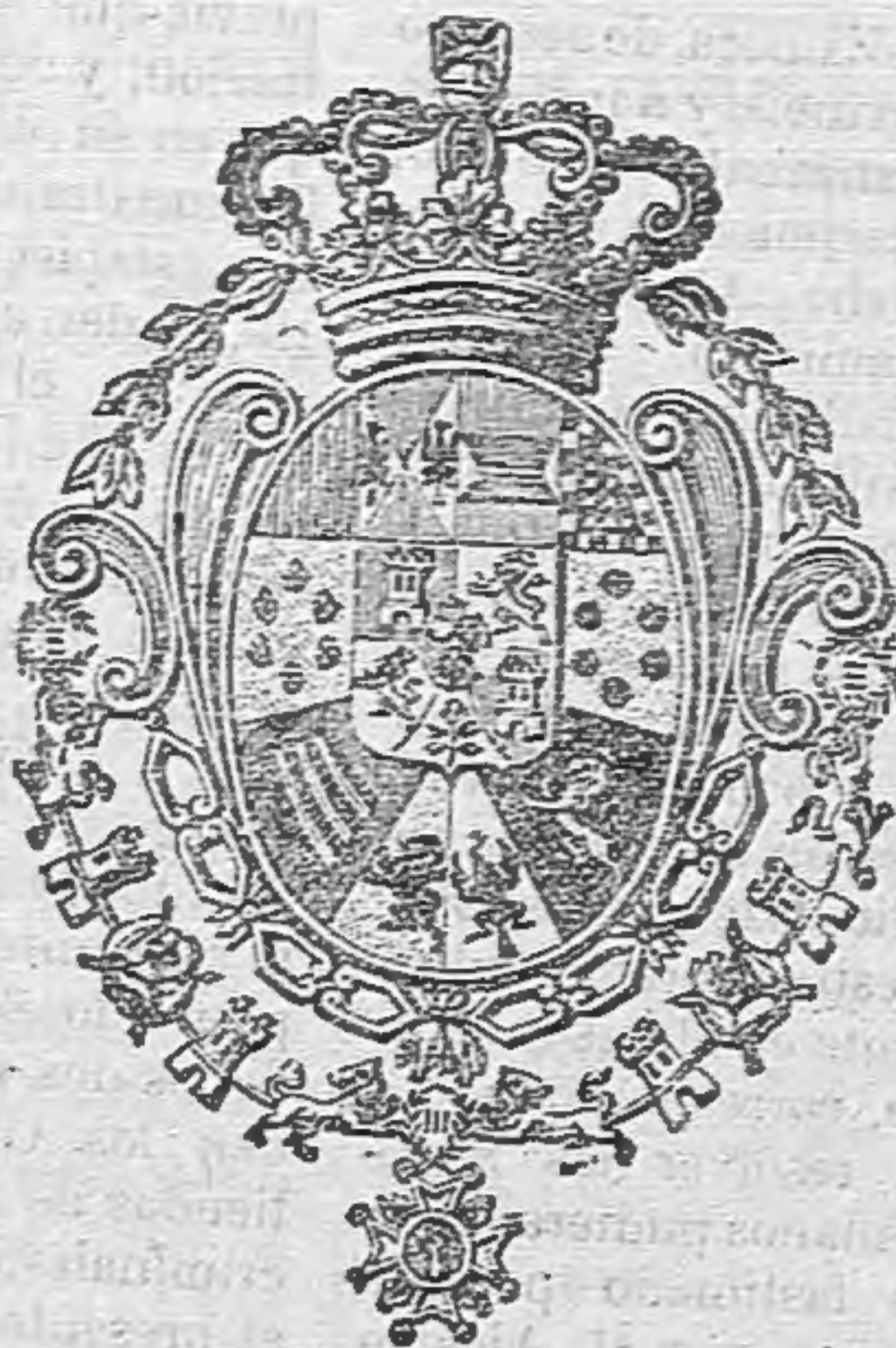


CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la insercion de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital 10
Un semestre id. id. 6
Un trimestre id. id. 4
Números sueltos 0'25

Se publica todos los días excepto los Domingos, Viernes Santo, Ascensión, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte días de su promulgacion, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el día en que termine la insercion de la ley en la *Gaceta* (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en San Sebastian sin novedad en su importante salud.

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia civil de la provincia de Zamora y el Juez de instruccion de Alcañices, de los cuales resulta:

Que en 27 de Octubre de 1892, Hipólito Castellanos, vecino de Carbajales, denunció ante el Juzgado municipal de Manzanal del Barco el hecho de que en el día 26 de aquel mes Agustin Serrano Felipe, pastor de Juan Fidalgo, había tenido pastando 300 reses lanaras en el prado de Valdefuentes, propiedad del denunciante.

Que seguido el correspondiente juicio de faltas, el Juez municipal dictó sentencia en 12 de Noviembre de 1892, por la que absolvió al denunciado y condenó al denunciante al pago de todas las costas y reintegros del juicio, con apercibimiento de que en lo sucesivo se abstuviera de presentar tales denuncias.

Que apelada la anterior sentencia y cuando se sustanciaba este recurso, el Gobernador, á instancia del Alcalde de Manzanal del Barco, y de acuerdo con Comision provincial, requirió de inhibicion al Juzgado; y sustanciado el incidente, se declaró mal formada la competencia, que no había lugar á decidirla, y lo acordado por Real decreto de 20 de Octubre de 1893.

Que el Gobernador, de acuerdo con el dictamen anterior de la Comision provincial, volvió á requerir de nuevo al Juzgado, fundándose en que marcadas por el Ayuntamiento, Visitador de ganaderia y cañadas y la Comision respectiva, las servidumbres públicas, entre la que se encontraba la de Valdefuentes, al llevar varios contribuyentes

á sus fincas los ganados de su pertenencia por la referida servidumbre, por no poderlo efectuar por otra alguna, los denunció al Juzgado municipal don Hipólito Castellanos, no obstante el expediente formado por el Ayuntamiento y las notificaciones hechas á los interesados, sin que éstos apelaran de las resoluciones gubernativas; en que se trataba de un asunto de los que, por excepcion, daban lugar á que se entablase el requerimiento solicitado por el Alcalde; porque ciñéndose aquel al paso de ganados por una servidumbre ó cañada pública, era indudable que se le debía aplicar el espíritu y la letra del art. 10 del Real decreto de 3 de Marzo de 1877, que atribuye á la autoridad municipal el deslinde, conservacion y restablecimiento de las vías y servidumbres en las cañadas, bien á virtud de reclamacion de denuncia de los Visitadores de ganaderia y cañadas, del personal del ramo de Montes ó de los guardas rurales; en que segun el art. 11 del mismo Real decreto, son autoridades de apelacion, los Gobernadores civiles, y los expedientes sobre deslindes seguirán hasta su terminacion los trámites marcados á los contenciosos administrativos; en que segun el art. 75 del Real decreto de 8 de Marzo de 1877, los que se consideren perjudicados por la providencia del Alcalde propietarios ó ganaderos, podrán apelar ante el Gobernador, dentro del término de quince días; en que estos textos legales, á los que era procedente agregar el artículo 72 de la ley Municipal, indicaban de una manera clara que Castellanos había equivocado el procedimiento para formular su queja, porque si se consideraba lastimado por alguna de las providencias dictadas por el Alcalde en el expediente sobre deslinde y demarcacion de las servidumbres y cañadas públicas, ó por otros actos posteriores á las mismas, ejecutados por los dueños de los ganados que habían pasado por la denominada Valdefuentes, debió formular sus gestiones cerca del Gobernador, en vez de interponerlas en la vía judicial.

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando: que el hecho denunciado por don Hipólito Castellanos ante el Juez municipal de Manzanal del Barco no se referia pura y simplemente al paso

de ganados del denunciado por el prado de Valdefuentes, de su propiedad, sino que el dicho denunciado estuviese detenido, pastando el ganado en el mencionado prado; que las citas legales que se hacian en el oficio del Gobernador no tenian aplicacion alguna al caso que motivaba este incidente, puesto que claramente se veia que la denuncia no iba dirigida á privar á los ganaderos de Manzanal, y particularmente al denunciado, que hicieran uso del paso y demás servidumbres que poseyeran sobre el prado de Valdefuentes, sino á castigar y corregir los abusos que se decian cometidos á la sombra de tales derechos, los cuales podian ser constitutivos de las faltas previstas y penadas en los artículos 611 y 612 del Código Penal.

de la denuncia, ó sea el que el ganado denunciado estuvo detenido pastando en el prado de Valdefuentes, y por tanto, que solo se trataba de actos que solo podian ser constitutivos de algunas de las faltas contra la propiedad antes enumeradas, la competencia del Juzgado para entender en la apelacion del juicio de faltas á que se referia este incidente era innegable, con arreglo á lo dispuesto en el art. 76 de la Constitucion y de sus concordantes, el 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y 10 de la Enjuiciamiento criminal.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el núm. 1.º del art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad Administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la denuncia presentada por D. Hipólito Castellanos se refiere únicamente al hecho de haber apacentado el pastor Agustin Serrano 300 cabezas de ganado lanar en el prado de Valdefuentes, propiedad del demandante,

sin que dicha denuncia tenga por objeto el uso ó abuso de las servidumbres pecuarias que sobre dicho prado se hallan establecidas.

2.º Que en tal concepto, tratándose en la denuncia objeto del juicio de faltas únicamente de los daños causados en propiedad particular, no cabe admitir la existencia de cuestion alguna previa que deba resolver la Administracion, y de la cual dependa el fallo que en su día hubieran de dictar los Tribunales del fuero común, toda vez que establecida la servidumbre pecuaria, los derechos que sobre ella pueda ejercitar el denunciado no son cuestiones que previamente tenga que resolver la Administracion, puesto que ninguna influencia habría de tener en el castigo de la falta de que se trata á los funcionarios de la Administracion, y por tanto, no encontrándose comprendido el presente caso en ninguno de los dos en que, por excepcion, pueden los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, no ha debido suscitarse el presente conflicto.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en San Sebastian á diecisiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE ESTADO

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer que, por convenir así al mejor servicio, quede sin efecto Mi Real decreto de ayer destinando al Ministro Residente D. Ramiro Gil de Urbarri para desempeñar, en comision, el puesto de Ministro Plenipotenciario en Lima, y nombrarle con la misma categoría diplomática que hoy tiene á Mi Legacion en Monte-

video, vacante por traslado de D. José de la Rica.

Dado en San Sebastian á veintisiete de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer que D. Luis del Castillo y Trigueros, Mi Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de segunda clase cerca de S. M. el Emperador del Japon, pase á desempeñar con la misma categoría el cargo de Mi Representante en las Repúblicas del Perú y de Bolivia.

Dado en San Sebastian á veintisiete de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

En atención á las circunstancias que concurren en D. José de la Rica y Calvo, Ministro Residente de España en Montevideo, y por convenir así al mejor servicio;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer pase en comisión con la misma categoría diplomática que hoy tiene, á encargarse de Mi Legación en Tokio.

Dado en San Sebastian á veintisiete de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Tomando en consideración las circunstancias que concurren en D. Andrés Freuller, Secretario de primera clase de Mi Legación en Lisboa;

Vengo en ascenderle á Ministro Residente de España en la vacante por ascenso del que la desempeñaba; entendiéndose que este nombramiento corresponde al segundo turno que el artículo 8.º de la ley vigente de la Carrera Diplomática señala al ascenso por antigüedad entre los Secretarios de primera clase.

Dado en San Sebastian á treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

(G. núm. 278)

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Zamora y el Juez de Instrucción de Alcañices, de los cuales resulta:

Que ante el Juzgado municipal de Manzanal del Barco denunció don Hipólito Castellanos á Bernardo Argüello pastor de Domingo Lopez, por tener 300 reses lanaras pastando en el prado de Valdefuentes, propiedad del denunciante, sin autorización para ello;

Que celebrado el juicio verbal y dictada sentencia absolviendo al denunciado Bernardo Argüello, se interpuso apelación por el denunciante, remitiéndose las diligencias al Juzgado de Instrucción de Alcañices, el cual fué requerido

por el Gobernador de Zamora, de acuerdo con la Comisión provincial y á instancia del Alcalde de Manzanal del Barco, fundándose el requerimiento: en que según manifiesta dicho Alcalde, marcadas por el Ayuntamiento, Visitador de ganaderías y cañadas y la Comisión respectiva las servidumbres públicas, entre las que se encuentra la titulada Valdefuentes, al llevar varios contribuyentes á sus fincas los ganados de su pertenencia por la referida servidumbre, á causa de no poderlo efectuar por otra alguna habían sido denunciados por don Hipólito Castellanos; y en que existe una cuestión previa administrativa, consistente en el deslinde de dicha servidumbre, correspondiendo á la Administración resolver las reclamaciones que Castellanos pudiera hacer si se considerase lastimado por las providencias dictadas por el Alcalde en el expediente sobre deslinde y demarcación de las servidumbres y cañadas públicas, ó por otros actos posteriores ejecutados por los dueños de los ganados que han pasado por la denominada de Valdefuentes, sin que antes de resolverse dicha cuestión previa haya podido el interesado acudir á la vía judicial.

El Gobernador citaba los artículos 10, 11 y 75 del Real decreto de 3 de Marzo de 1877, el 72 de la ley Municipal y los artículos 3.º y 5.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el conflicto, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando: que el hecho denunciado no se refiere pura y simplemente al paso del ganado por el prado de Valdefuentes, sino á la detención y pastoreo en dicho prado; que las citas contenidas en el oficio de requerimiento no tienen aplicación al caso presente, puesto que la denuncia no va dirigida á privar á los ganaderos de Manzanal del Barco ni al denunciado de hacer uso del paso y demás servidumbres que pesen sobre el prado de Valdefuentes, sino á castigar y corregir abusos que se dice cometidos á la sombra de tales derechos, atribuidos por el artículo 76 de la Constitución, 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y 10 de la de Enjuiciamiento criminal, es innegable la competencia del Juzgado para conocer del asunto de que se trata;

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el núm. 1.º del art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando por virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual depende el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la denuncia presentada por D. Hipólito Castellanos se refiere únicamente al hecho de haber apacentado el pastor Bernardo Argüello 300 cabezas de ganado lanar en el prado de Valdefuentes, propiedad del denunciante, y sin que dicha denuncia tenga por objeto el uso ó abuso de las servidumbres pecuarias que sobre dicho prado se hallen establecidas.

2.º Que en tal concepto, tratándose en la denuncia objeto del juicio de faltas únicamente de daños causados en propiedad particular, no cabe admitir la existencia de cuestión alguna

previa que deba resolver la Administración, y de la cual dependa el fallo que en su día hubieran de dictar los Tribunales del fuero común, toda vez que establecida la servidumbre pecuaria, los derechos que sobre ella pudieran ejercitar el denunciado no son cuestiones que previamente tenga que resolver la Administración, puesto que ninguna influencia habría de tener en el fallo que pronunciara el Tribunal ordinario.

3.º Que tampoco está reservado el castigo de la falta de que se trata á los funcionarios de la Administración, y por tanto, no encontrándose comprendido el presente caso en ninguno de los dos en que, por excepción, pueden los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, no ha debido promoverse el presente conflicto jurisdiccional.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en San Sebastian á diez y siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE ESTADO

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;

Accediendo á lo solicitado por don Andrés Freuller y Sánchez de Quirós, Ministro Residente, Jefe de la Sección de Comercio del Ministerio de Estado,

Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal estado de salud, ha presentado del mencionado cargo, declarándole cesante con el haber que por clasificación le corresponda, por servicios y que cuando satisficiera del cargo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en San Sebastian á cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;

Por convenir así al mejor servicio, Vengo en disponer que D. Luis Polo de Bernabé, Ministro residente y Agente Diplomático de España en Egipto pase con la misma categoría á desempeñar el cargo de Jefe de la Sección de Comercio del Ministerio de Estado, vacante por dimisión de D. Andrés Freuller y Sánchez de Quirós.

Dado en San Sebastian á cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;

Tomando en consideración las circunstancias que concurren en D. Enrique Otal y Ric, Secretario de primera clase en el Ministerio de Estado,

Vengo en ascenderle á Ministro Residente y deslindearle al cargo de Agente Diplomático en Egipto, vacante por traslado del que lo desempeñaba; en la inteligencia de que este nombramiento corresponde al tercer turno que el artículo

8.º de la ley vigente de la Carrera Diplomática señala al ascenso por elección entre los Secretarios de primera clase.

Dado en San Sebastian á cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICION

Señora: Se han recibido en el Ministerio de Fomento exposiciones fechadas en Madrid, en Barcelona, Cádiz, Murcia, Villanueva y Geltrú, Zaragoza y Villafranca de Panadés, en las que por algunos padres de familia se solicita, aunque en distintos términos y apoyados en diversas razones, que no tenga aplicación el Real decreto de 16 de Septiembre último sobre reforma de la segunda enseñanza á los alumnos que hubieren ingresado en ella, cuando á la sazón se hallaba vigente el régimen establecido por el Real decreto de 13 de Agosto de 1880, que exige solo cinco años de estudios para poderse graduar de Bachiller, en lugar de los seis que, al mismo efecto, en el plan novísimo se fijan.

Basta leer el art. 74 de la vigente ley de Instrucción pública de 1857, para patentizar la legalidad y competencia con que el Gobierno ha procedido al proponer á V. M. la aprobación del referido Real decreto.

El orden con que han de estudiarse las asignaturas en todos los Centros docentes, el tiempo que ha de emplearse en cada una de ellas, el número de Profesores que ha de haber para enseñarlas, son derechos que la ley de Instrucción pública, en armonía con los principios, atribuye á la potestad reglamentaria de los Gobiernos, así como también los de poder modificar, disminuir ó aumentar las materias asignadas á cada enseñanza, siempre que así lo exija el mayor lustre de los estudios ó lo aconsejen los progresos de los conocimientos humanos.

Pero si la legalidad vigente á tanto alcanza, ese derecho estricto puede y debe ser templado en su ejercicio ante consideraciones de equidad, sobre todo cuando se invocan para llevar á cabo cambios tan trascendentales como el que entraña la actual reforma de la segunda enseñanza.

Comprendiéndolo así el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros propuso á V. M. algunas prudentes excepciones á aquella regla general, como el no exigir á los aspirantes en el año actual la justificación de haber cumplido la edad de diez años para el ingreso en la segunda enseñanza, y el no obligar á cursar á los alumnos aprobados en el cuarto grupo y á quienes solo faltaba un año para obtener el grado de Bachiller

por el plan antiguo, los dos de estudios preparatorios que prescribe el plan moderno para poder alcanzar el mismo título.

La mera enunciación de este doble criterio da á conocer que, si en el rigorismo del derecho estricto no pueden ser amparados los naturales deseos de los padres de familia recurrentes, en el campo más amplio de la equidad no existen graves obstáculos que impidan atenderlos.

En rigor nada hay para ello que hacer sino ampliar á todos los antiguos alumnos lo que equitativo se estimó ya en el Real decreto para los que habían estudiado y aprobado los cuatro años, según el régimen anterior. De este modo vendría á resultar que aquellos que ingresaron en la enseñanza secundaria con la esperanza, ya que no con el derecho, adquirida de concluir en cinco años sus estudios, en ese periodo de tiempo, y no en seis, podrían verlos terminados.

Para llegar á ese resultado, la fórmula más adecuada debe ser escogida, oyendo antes al Consejo de Instrucción pública, cuya opinión reviste la más alta y competente autoridad, y ofrece la mayor garantía de acierto para poder conciliar los intereses particulares en que se fundan los padres de familia con las apremiantes exigencias de la general cultura á que la reforma obedece.

Fundando en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene el honor someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 1.º de Octubre de 1894.
—Señora.—A L. R. P. de V. M.,
Alejandro Groizard.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;

Vengo en decretar lo siguiente:

Los alumnos que hayan ingresado en la segunda enseñanza antes de la publicación del decreto de 16 de Septiembre del corriente año podrán obtener el grado de Bachiller estudiando solo cinco años.

El Ministro de Fomento oyendo al Consejo de Instrucción pública, adoptará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Dado en San Sebastian á dos de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: De Real orden paso á

manos V. I. la adjunta instancia documentada de doña María Luisa Carvajal y Davalos, Duquesa de San Carlos, en solicitud de que se rehabiliten á su favor los títulos de Conde del Puerto y de Castillejo, á fin de que con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.º del Real decreto de 14 de Noviembre de 1885 se practique la información que en él se previene por el Juzgado de primera instancia competente de esta capital.

Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 1.º de Octubre de 1894 —
Ruiz y Capdepon.—Sr. Presidente de la Audiencia de Madrid.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la cuenta de gastos de honorarios devengados por el Arquitecto D. Ignacio Conrado Bartolí en la redacción de un proyecto y presupuesto de obras en el edificio que ocupa la Aduana de Barcelona.

Resultando que por la suprimida Dirección general de Contribuciones indirectas se ordenó á la Administración de la Aduana de aquella capital, en 8 de Mayo de 1890, la formación del mencionado proyecto y presupuesto, encargándose de la redacción de los mismos al Arquitecto D. Ignacio Conrado Bartolí, que dió por terminado su trabajo en 30 de Junio de dicho año, remitiendo á la referida Administración, por duplicado, el programa, Memoria, pliego de condiciones facultativas, planos y pesetas;

Resultando que pendiente todavía de aprobación dicho proyecto, el Sr. Bartolí presentó su cuenta, compuesta de tres partidas, una de 1932 pesetas y 31 céntimos por la formación de planos, otra de 241 pesetas 53 céntimos por la del presupuesto, y la tercera, también, de 241 pesetas 53 céntimos, por las copias de los planos, justificando además un gasto de 300 pesetas abonadas al Delineante y Escribiente que le auxiliaron en sus trabajos, y que esa Subsecretaría propone su aprobación en todas sus partes, por encontrarla ajustada á la tarifa vigente;

Considerando que, aun cuando es irregular el procedimiento seguido en el expediente, del que no conoció la suprimida Dirección general de Propiedades ni la Delegación de Hacienda de la provincia hasta después de haber realizado el Arquitecto sus trabajos, no puede negarse á éste el derecho de hacer efectivos los honorarios devengados en el servicio que se le encomendó y de los gastos que por el mismo se le ocasionaron y son legalmente de abono;

Considerando que las dos primeras partidas de la cuenta de hono-

rios, que ascienden á 2173 pesetas 48 céntimos, se encuentra ajustada á la tarifa que aprobó la Real orden de 31 de Mayo de 1858, no debiéndose reconocer el importe de la tercera partida que se refiere á la copia de planos del proyecto, porque tal copia no le fué encargada al Arquitecto, y resulta evidentemente innecesaria aun en el caso de que las obras se hubieran ejecutado, toda vez que la circular de la Dirección general de Propiedades de 31 de Agosto de 1889 dispone únicamente se formen por duplicado el presupuesto de gastos y pliegos de condiciones:

Considerando que el gasto de 300 pesetas invertidas en Auxiliares por el Arquitecto está autorizado por la referida tarifa:

Considerando es preciso evitar para lo sucesivo que los intereses del Estado se perjudiquen, como lo han sido en este caso, por la ligereza de instruir expedientes de la índole del de que se trata:

Considerando que si bien en virtud de lo dispuesto en el reglamento de 14 de Septiembre de 1893, los Arquitectos ó Ingenieros inspectores técnicos deben desempeñar preferentemente los trabajos de investigación y comprobación de la riqueza urbana, por constituir la especialidad de sus estudios, así como en unión de los Inspectores administrativos investigar todos los tributos y cuantos trabajos de gabinete ó comprobación sobre el terreno se crean conducentes al mejor desempeño de su misión investigadora y comprobadora, teniendo el Estado á su servicio

proyectos y presupuestos y dirección de las obras que en los edificios de su propiedad hayan de hacerse, es natural y lógico, en bien de sus intereses, no emplear otros peritos cuyas minutas de honorarios tiene la Administración que satisfacer;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por esa Subsecretaría y lo informado por la Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido disponer:

Primero. Que se reconozca á favor del Arquitecto D. Ignacio Conrado Bartolí la cantidad de 2.473 pesetas 48 céntimos por la formación del proyecto y presupuesto de las obras no realizadas en el edificio Aduana de Barcelona, incluyéndose dicha suma para su pago en la relación de acreedores por ejercicios cerrados que ha de figurar en el primer presupuesto que se redacte.

Segundo. Que antes de autorizarse servicios de la índole del de que se trata, se depure la indispensable necesidad de ejecutarlos, para evitar los perjuicios que en casos análogos pueden originarse al Teso-

ro, imponiéndole sacrificios de que no ha de resultar utilidad alguna.

Tercero. Que á partir de esta fecha, los Arquitectos ó Ingenieros Inspectores técnicos de Hacienda serán los exclusivamente encargados de la formación de todo proyecto ó presupuestos de obras de reparación que deban ejecutarse en edificios de propiedad del Estado ó de particulares en que se hallen instaladas oficinas de Hacienda, sin otorgar otros derechos ni emolumentos á dichos funcionarios que los que disfruten por su cargo de tales Inspectores, sin perjuicio de que les sean abonadas las dietas y gastos de locomoción en el caso de que los trabajos hayan de tener lugar en puntos distintos del en que tengan su residencia oficial, según previene el citado reglamento de 14 de Mayo de 1893, pudiendo asimismo serles de abono también los gastos de material que les ocasionen la formación de planos y presupuestos, siempre que se considere no son suficientes á cubrirlos lo consignado en concepto de material á la Inspección provincial á que se hallen afectos.

Y cuarto. Que lo dispuesto en la prevención anterior se entienda para las obras y reparos que ocurran en los edificios de propiedad del Estado en donde se hallen instaladas las dependencias provinciales de Hacienda y en los de aquellos cuya administración y custodia está encomendada á las Administraciones del ramo, quedando los servicios propios de la Administración central en la misma forma que actualmente tiene.

Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1894.
—Salvador.—Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

En atención á las noticias oficiales de nuestro Consol en Marsella dando cuenta de que el día 20 de Septiembre último ocurrió la última defunción sospechosa de cólera; teniendo en cuenta el escaso desarrollo y difusibilidad de la epidemia en casos anteriores y conforme á lo prevenido en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer se derogue la Real orden de 30 de Julio de 1894, por la que se declararon súcias las procedencias de dicho punto, y se sometan á tres días de observación como mínimo, ó los que correspondan, en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre de 1892, á contar desde la publicación de esta Real orden, y lleguen á nuestros puertos con patente lim-

pia ó con nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.

Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sùcio, dando cuenta á este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1894.—Aguilera.—Señores Gobernadores de las provincias marítimas y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

SUBSECRETARIA — CIRCULAR

Por el Ministerio de la Guerra se comunicó á este de la Gobernación con fecha 14 de Septiembre último la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha dictado con esta fecha la Real orden circular siguiente:

«Próxima la época en que deben pasar la revista anual los individuos á quienes se refieren los artículos 41 y 46 del reglamento orgánico de las zonas militares, aprobado por Real orden de 24 de Agosto de 1892;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que en el presente año se efectúe la revista con sujeción á las reglas siguientes:

Primera. Los reclutas con licencia ilimitada por exceso de fuerza en las unidades orgánicas á que fueron destinados desde la Caja, los individuos sin instrucción militar pertenecientes á la segunda reserva y los reclutas en depósito que residan en la capitalidad de otro caso, ante el Coronel de la zona que haya establecida en el punto de su residencia.

Segunda. Los sargentos, cabos y soldados con licencia ilimitada por exceso de fuerza reglamentaria en las unidades orgánicas en que sirvieron los pertenecientes á la reserva activa y segunda reserva con instrucción militar que procedan del arma de Infantería, de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor y tropas de Administración y sanidad militar, pasarán la revista ante los Coroneles de los regimientos de reserva de Infantería, establecidos en los puntos en que aquellos residan; los individuos de tropa comprendidos en esta regla que procedan de Caballería, Artillería é Ingenieros y residan en la capitalidad de los regimientos de reserva de Caballería y depósitos de reserva de Artillería y de Ingenieros, se presentarán á los Jefes de estas unidades de reserva verificándolo, en otro caso, ante el Jefe de la reserva ó depósito que haya establecido en el punto de su residencia, aun cuando no sea de su misma Arma ó Cuerpo.

Tercera. Los individuos comprendidos en las reglas anteriores que no residan en las capitalidades de zonas de reclutamiento, regimientos de reserva de Infantería y de Caballería y depósitos de reserva de Artillería y de Ingenieros, pasarán la revista ante el Alcalde presentándose, á falta de éste, al Comandante del puesto de la Guardia civil del punto donde residan, quienes formarán relaciones clasificadas por Armas y Cuerpos de los individuos que revisen, según su situación, que conocerán

por los pases que les presenten los interesados, consignando en dichos pases la nota de *revisado*.

Cuarta. En los puntos en que no residan zonas ni reservas y haya Comandante militar ó destacamento mandado por Oficial, pasarán ante él la revista, en la forma prevenida en la regla anterior.

Quinta. Los que con la debida autorización se hallen viajando ó hayan trasladado su residencia, pasarán la revista ante cualquiera de los Jefes mencionados, Alcaldes ó Comandantes del puesto de la Guardia civil del punto en que se encuentren.

Sexta. La revista se pasará durante los meses de Octubre y Noviembre próximos, y los Alcaldes, Comandantes militares de destacamento y puestos de la Guardia civil, remitirán en la primera quincena de Diciembre á los Coroneles de las zonas de reclutamiento relaciones nominales de los que se hayan presentado al acto de la revista y estén comprendidos en la clasificación que se detalla en la regla 1.ª y á los Jefes de los regimientos de reserva de Infantería, Caballería, depósito de reserva de Artillería y de Ingenieros, relaciones nominales de los pertenecientes á dichas Armas y Cuerpos, á quienes se refiere la regla 2.ª

Séptima. Terminada la revista, los Jefes de las zonas y reservas averiguarán el paradero de los que hayan faltado dirigiéndose á los Alcaldes y empleando los medios que les sugiera su celo é interés por el servicio.

Octava. Los expresados Jefes remitirán en la segunda quincena de Diciembre los estados á que se refiere el artículo 42 del reglamento mencionado á los segundos Jefes del Cuerpo de Ejército correspondiente á la region donde residan, con la clasificación que se determina en las reglas 1.ª y 2.ª de esta circular.

Novena. Los segundos Jefes de Cuerpo de Ejército remitirán á los Comandantes en Jefe de sus regiones dichos estados, á fin de que estas Autoridades lo verifiquen en resumen á este Ministerio su conocimiento y efectos consiguientes; en la inteligencia de que con esta fecha se da conocimiento de esta circular al Ministerio de la Gobernación para que disponga se inserte en los *Boletines oficiales* de las provincias y recomiende á las Autoridades dependientes de dicho Ministerio que contribuyan por su parte al mejor resultado de la revista anual que ha de verificarse.

De la propia Real orden, comunicada por el señor Ministro de la Gobernación lo traslado á V. S. para su conocimiento y fines que se expresan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1894.—El Subsecretario, D. Alonso Castrillo.—Sr. Gobernador civil de....

(G. núm. 279.)

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Circular

El Ministerio de Estado, por Real orden de 27 de Agosto último, traslada á este departamento la Nota que el Encargado de Negocios de Turquía en esta Corte le dirige con fecha 12 del mismo mes, significándole en ella la necesidad de que se llame la atención de los establecimientos de crédito, banqueros y comerciantes españoles, á tenida la facilidad con que se descuentan por los mismos las letras de cambio y otros efectos comerciales creados en aquel Imperio sobre la ley del impuesto del timbre que hoy rige, la cual quita

todo recurso contra los endosantes y eventualmente contra el librador de un efecto comercial reconocido en Turquía que no haya satisfecho el correspondiente derecho de timbre.

Y con el fin de evitar las consecuencias que la omisión del pago del impuesto de timbre pudiera irrogar tanto á los establecimientos de crédito como á los banqueros y comerciantes que se dedican á descontar los citados efectos;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se ponga en conocimiento de los Presidentes de las Cámaras de Comercio, como asimismo las aclaraciones á que deben atenderse todos los que á esta clase de operaciones se dedican.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Septiembre de 1894.—El Director general, Primitivo M. Sagasta.—Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de....

Nota sobre la caducidad por el portador de un efecto de comercio expedido en Turquía sin timbre.

Como las relaciones comerciales entre España y Turquía toman de día mayores proporciones, es conveniente dar á conocer á los banqueros y negociantes Españoles las disposiciones principales de la ley otomana sobre el timbre, respecto de las letras de cambio y otros efectos de comercio expedidos en aquel Imperio.

Los derechos de timbre sobre dichos efectos de comercio están señalados en el art. 3.º de la ley, prefijados en un medio por mil, la caducidad para el portador, el derecho de los endosantes y eventualmente el del librador está determinado por el art. 28 en los términos siguientes:

«Art. 28. Las letras de cambio y otros efectos negociables ó de comercio que no estén timbrados ó autorizados por el timbre móvil, no gozarán del beneficio de la garantía solidaria establecida por los artículos 76 y 77 del Código de Comercio otomano.

toda garantía, y el portador no tendrá acción, en caso de no tener aceptación la letra de cambio, contra el librador, y si la tuviese, solamente tendrá acción contra el aceptante y contra el librador, á menos que este último no justifique que hubiese señalado el plazo del vencimiento, lo cual le librará de toda responsabilidad.»

La legislación fiscal otomana lleva, pues, su severidad hasta alterar profundamente los beneficios de las partes entre sí, tales como los establece el Código de Comercio otomano mismo (G núm. 277.)

ANUNCIOS OFICIALES

TESORERIA DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Notificación al Alcalde de Rairiz de Veiga.

Reclamada con insistencia una certificación en que conste la clase de fincas y el líquido imponible que tienen amillarado cada una de por sí las denominadas «Centenar da Plaza» y «Pago de Seijo» sitas ambas en la parroquia de Ordes, Ayuntamiento de Rairiz de Veiga, con las que como de su propiedad D. Fernando Rodríguez constituye fianza á favor de la Hacienda para garantizar el cargo de Recaudador de contribuciones de Calvos de Randín y Sareaus, y no obteniendo resultado alguno esta oficina á pesar de las diversas comunicaciones que se han dirigido la Alcalde del referido Ayuntamiento, s

la hace saber que si en el plazo de 5.º día á contar desde la publicación de esta notificación en el *Boletín oficial* no remite el certificado aludido en los términos que por esta oficina se le ha reclamado, se le impondrá la multa de 25 pesetas con la que está conminado por acuerdo de la Delegación fecha 11 de Julio último.

Orense 5 de Octubre de 1894.—Marcelino Arango.

AYUNTAMIENTOS

ORENSE

Siendo de reconocida utilidad y conveniencia para la industria y el comercio, que la feria que se celebra en esta ciudad el día veinte y uno de cada mes, no se efectúe en Domingos ni en días de fiesta entera; he creído conveniente anunciar al público que á lo sucesivo solo se celebrará dicha feria el día fijo indicado, siempre que no coincida en uno de los últimos, en cuyo caso se trasladará al siguiente día laborable.

Lo que se hace público para conocimiento de todos.

Orense 2 de Octubre de 1894.—Ricardo Nóvoa.

ANUNCIOS

CASA EN VENTA

La viuda de José Trabazos vende la casa en construcción número 93 de la calle del Progreso de esta ciudad, cuyo solar y terreno adyacente mide once metros de fachada por 65 de fondo; linda al Norte con solar de don Hipólito Bravo; al Mediodía con casa de D. David Perez; al Poniente con viña de doña Concepción Gonzalez, y al Naciente con la calle del Progreso por donde tiene la entrada, que está libre de cargas y rentas.

Los títulos de propiedad, precio y condiciones están de manifiesto en la aatir onde D. Pablo Martinez donde pueden examinarlos cuantas personas se interesen en la adquisicion. 18-30

ABONARÉS DE CUBA

Se pagan á buenos precios

Tambien se compra papel del Empréstito de 175 millones de pesetas.

Calle de San Pedro, núm. 12, 2.º

ORENSE 17-30

COMERCIO SALON DE VESTIR

SERAFIN FEIJOO

Plaza Mayor, 16.—Orense

y en Verin, Plaza Mayor, bajos del Casino

Gran surtido en géneros de invierno con especialidad en capas de superiores géneros y de las mejores fábricas.

Talmas-abrigos de todas clases.

Trajes de magníficos géneros: se hacen á la moda del día.

En la misma casa hay para la guardia civil cordón-hombreras, cinta de sombreros, galones, botones, estrellas y otros géneros.

CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA

GRAN ESTABLECIMIENTO

DE

ARBORICULTURA Y FLORICULTURA

Director propietario

DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA

Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida,

Proveedor de la Asociación de Agricultores de España

VIDES AMERICANAS

De producto directo y para porta injerto. Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.

Se enviará el catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida.

Representante en esta provincia D. Roberto Justo Novoa, Colón, 20, principal.

Imprenta LA POPULAR